SEÑOR

**JUEZ CONSTITUCIONAL – REPARTO**

**REFERENCIA:** ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL.

**JEISON HUMBERTO GÓMEZ CRUZ,** mayor de edad, Identificado con cédula de ciudadanía 1.058.966.190 con residencia y domicilio en el Municipio de Popayán, Cauca; de profesión abogado y filósofo, actuando en nombre propio y en mi condición de aspirante en el concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial – Juez Promiscuo Municipal convocado por el Acuerdo PSAA18-11077 de 2018 (Convocatoria Nº 27), acudo a su despacho con el fin de solicitarle el amparo de mis derechos fundamentales al **debido proceso, igualdad y acceso a los cargos públicos,** que considero fueron vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura- unidad de carrera judicial y la universidad Nacional de Colombia.

Petición que realizo con fundamento en los siguientes

**HECHOS:**

1. Soy aspirante al cargo de “*JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL*” que fue convocado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (CONVOCATORIA 27) en el cual, y luego de realizar la respectiva prueba de conocimientos, obtuve en la primera calificación 780,53; puntaje que fue corregido con posterioridad, en atención a errores encontrados en el formulario de preguntas, asignándome la calificación aprobatoria de 838,57 puntos.
2. Seguidamente y toda vez que los errores eran persistentes y grotescos por parte de la Universidad Nacional *(errores, en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la construcción de las pruebas, porque incluye temas que no corresponden al cargo evaluado y porque algunas tienen múltiples opciones de respuesta*), la directora de la Unidad de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura, Claudia Marcela Granados, Romero profirió acto administrativo en el cual se ordena retrotraer la actuación desde la citación a las pruebas de conocimientos generales y específicos, de aptitudes y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a derecho. Resolución que se plasma a continuación:

(27 de octubre de 2020)

**“*Por medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria 27"***

**LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de lo previsto en el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en la sesión extraordinaria de 22 de octubre de 2020 y,

**CONSIDERANDO**

*(…)*

***Con el propósito de proteger el mérito, salvaguardar el debido proceso y el derecho a la igualdad,*** *entre otros, fue necesario corregir las irregularidades presentadas desde la calificación de las pruebas, con la expedición de la Resolución CJR19 - 679 de 7 de junio de 2019, que dispuso corregir la actuación administrativa a partir de la incorporación de la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos incluida su publicación mediante las Resoluciones CJR18-559 de 2018 y CJR19-632 de 2019, para ajustar todo el trámite a derecho con la publicación de la calificación recibida el 7 de junio de 2019.*

*(…)*

*Que a pesar de los esfuerzos realizados para corregir los yerros que se presentaron en la Fase 1 de esta convocatoria, se han seguido encontrando errores, en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la construcción de las pruebas,* ***porque incluye temas que no corresponden al cargo evaluado y porque algunas tienen múltiples opciones de respuesta,*** *lo que impide que esos ítems cumplan su función de discriminación, por ser cualquier respuesta válida.*

*(…)*

*De ello se desprende que dichos errores radican en la estructuración de las preguntas con incidencia directa en el resultado o la calificación,* ***lo que afecta negativamente la calidad de la prueba, en contravía de lo perseguido con la convocatoria, la ley y la Constitución, de la prevalencia del mérito para ingresar o ascender en la rama judicial como juez o magistrado***

*Las inconsistencias en la prueba de aptitudes y conocimientos, reportadas por la Universidad Nacional de Colombia, generan como respuesta la* ***repetición*** *de las pruebas a cargo de dicha institución educativa.*

*Formalmente, la actuación administrativa cumple con todas las fases hasta ahora desarrolladas, pero la base o prueba, que permite su continuación, está horadada por sustanciales inconsistencias (estructuración) que impiden proseguir con las etapas hasta tanto no se sustituya por cimiento consolidado.* ***Es decir, una prueba con tales yerros no puede producir efectos válidos****, por lo que se hace necesario corregir la irregularidad por medio del mecanismo previsto en el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.*

***En consecuencia, la Universidad Nacional de Colombia construirá y aplicará nuevas pruebas de conocimientos generales, específicos y de aptitudes, con el propósito de garantizar que el mérito sea siempre su principio rector***

*(…)*

***Tratándose de concursos, cobra mayor importancia la necesidad de corregir los yerros presentados en el proceso administrativo****, si se tiene en cuenta que se trata de un concurso para jueces y magistrados, dado que la administración de la carrera judicial se debe orientar a atraer y retener los servidores más idóneos para ocupar dichos cargos, responsables de la prestación del servicio público esencial de administrar justicia y en los cuales podrán permanecer hasta la edad de retiro forzoso, esto es, hasta los setenta (70) años.* …” *(las negrillas, el rojo y las subrayas no hacen parte del original)*

1. Seguidamente y luego de la presentación de una nueva prueba, mediante la resolución No. 01 de septiembre de 2022, me fueron asignados 793.17 puntos. En atención a que dicho puntaje no fue aprobatorio, solicité la exhibición de el examen a fin de detectar posibles errores en la calificación del examen y en su estructura.
2. En dicha exhibición del examen y a pesar de que a la Universidad Nacional se le habían dado ya una serie de prerrogativas para que corrigiera el examen inicial, corrección que no hizo bien, y además se le dio la posibilidad de elaborar un nuevo examen; volvió y cometió errores groseros y reiterativos en la elaboración del nuevo examen, dentro de los cuales se destacan preguntas con múltiple respuesta y preguntas que no corresponden con el cargo evaluado, entre otros defectos.
3. Dichas anomalías y errores groseros en que la Universidad Nacional volvió a incurrir, fueron debidamente argumentados en el recurso de reposición presentado ante la última calificación. Recurso en el cual se argumento de manera seria, detallada y de fondo, cada una de las preguntas en las cuales la Universidad Nacional cometió sendos errores.
4. A pesar de dicha argumentación seria en el recurso de reposición, mediante resolución del día 16 de enero de 2023, la señora Claudia M. Granados R. directora de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, resuelve dicho recurso de una manera general y escueta a todos los recurrentes, en ella se limita a realizar una Justificación unilateral a las respuestas, más no a dilucidar los errores planteados en el recurso de impugnación. Tanto es así que en aquellas preguntas en las cuales se objetaba temas que no correspondían con el cargo evaluado, la resolución del recurso solo se limitó a decir por qué la respuesta dada por la Universidad Nacional era válida, cuándo este no era lo que se objetaba; hecho que da a entender que el estudio de los recursos se hizo de manera escueta, sin rigor y sin analizar los errores que se le planteaban. Lo mismo sucedió con aquellas preguntas en la cuales se identificaron múltiples respuestas, confusas y con errores de redacción.

**FUNDAMENTACIÓN DE LAS PREGUNTAS CON ERRORES**

A continuación, y de manera resumida se presenta el esquema de cada una de las preguntas en que se advirtieron sendos errores. Para un mayor análisis y profundización en los argumentos aquí resumidos, el señor juez constitucional podrá mirar el argumento completo a cada pregunta objetada, dentro del escrito de impugnación presentado y el cual se anexa a la presente acción constitucional.

1. **PREGUNTAS CON UNA TEMÁTICA QUE NO CORRESPONDE A LA COMOPETENCIA DE JUECES PROMISCUOS MUNICIPALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTA 100 - No es de competencia jueces promiscuos municipales**  25 víctimas de un producto defectuoso inician una acción de grupo a través de apoderado judicial, el cual es asignado al Juzgado Civil del Circuito, la cual se admitió y está debidamente notificada. Con posterioridad, otra persona, también víctima por los mismos hechos, demanda a través de apoderado judicial, demanda que es asignada a otro Juzgado Civil del Circuito. En el segundo proceso, el demandado promueve una excepción previa y dice que se tramita otra acción de grupo por los mismos hechos en su contra. Este segundo juez debe:   1. Deniega la excepción previa y continúa el proceso porque la norma procesal Excluye esa posibilidad. 2. Concede la excepción previa y ordena la acumulación de las demandas Remitiendo el expediente al otro juzgado. 3. Deniega la excepción previa, porque la acción paralela puede cursar de manera independiente a la acción de grupo. 4. Concede la excepción previa, ordena el archivo de la demanda y remite copia del expediente a la Defensoría del Pueblo. | |
| **ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia**  **Marcela Granados Romero** |
| **La acción de grupo NO es competencia de los Jueces Promiscuos Municipales**  De conformidad con el **artículo 51** de la ley **472 de 1998,** pues la competencia está designada en primera instancia a los jueces administrativos y a los jueces | Esta pregunta es pertinente porque la posibilidad de acciones independientes a la acción de grupo y la manera en que procesalmente se le debe dar curso a esta, haciendo una mezcla entre la norma especial, es decir la Ley 472 de 1998 y la norma general que es el  Código General del Proceso, es de vital importancia |

|  |  |
| --- | --- |
| civiles de circuito y en segunda instancia corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia, respectivamente. el enunciado lo corrobora al asignar ambas demandas al Juez de circuito. En ese orden de ideas, se no está preguntando por una temática que no nos corresponde a los Jueces Promiscuos Municipales. | para el juez en su praxis judicial. En síntesis, comporta una articulación entre el uso de los métodos de interpretación y la integración de la ley. |
| No se alega la pertinencia o no de la pregunta respecto las acciones y las normas a aplicar, sino la falta de competencia de los Jueces Promiscuos Municipales para resolver ese tipo de controversias jurídicas. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTA 102 – no es de competencia jueces promiscuos municipales**  En un proceso de **MAYOR CUANTÍA**, de restitución de inmueble arrendado, el demandante pide una inspección judicial. El Juez en la audiencia encuentra que el inmueble está desocupado. El demandante solicita la restitución provisional, la cual se concede y se le hace la entrega del bien. La parte demandada se opone, se la niegan y presenta recurso de apelación por violación al debido proceso. **El juez que resolverá el recurso**.   1. Revoca, porque la restitución y la entrega procede solo hasta la sentencia que lo ordene. 2. Confirma, porque la restitución y la entrega se ordenó en la inspección judicial. 3. Revoca, porque la diligencia de inspección judicial solo se realiza para verificar el estado del inmueble. 4. Confirma, porque con la restitución provisional el arrendatario puede disponer libremente del inmueble. | |
| **ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia**  **Marcela Granados Romero** |
| **Los Jueces Promiscuos Municipales** no son competentes para conocer proceso de mayor cuantía Y MUCHO MENOS EN SEGUNDA INSTANCIA.  **ARTÍCULO 20. COMPETENCIA DE LOS JUECES CIVILES DEL CIRCUITO EN PRIMERA INSTANCIA**. | Esta pregunta es pertinente porque el funcionario judicial en la práctica de la prueba de inspección judicial en los procesos de restitución de inmueble arrendado, debe tener especial cuidado porque además de cumplir con los requisitos y fines previstos para la práctica de esta prueba, en esta clase de proceso tiene un tratamiento diferente al facultar la entrega anticipada del inmueble antes de la sentencia. |
| No se alega la pertinencia de la pregunta respecto las acciones aplicar, sino la falta de competencia de los Jueces Promiscuos Municipales para resolver ese tipo de controversias jurídicas. | |

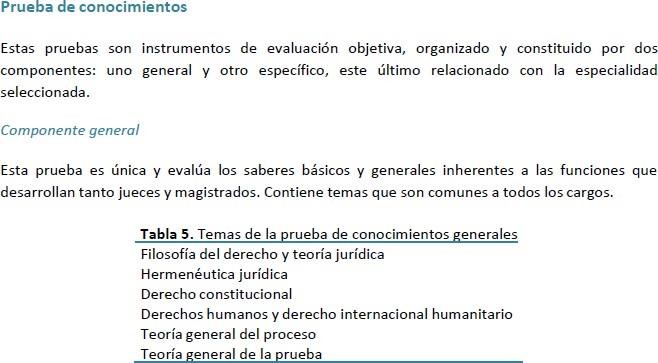
**PREGUNTA 103 – no es de competencia jueces promiscuos municipales**

Una persona hizo uso de un **procedimiento patentado**. El titular de la patente lo demandó al considerar que le habían violado su monopolio de explotación exclusiva, sin contar con la licencia respectiva. El demandado excepcionó que no requeriría licencia para desarrollar es actividad. La excepción sería procedente si el demandado hiciera uso del procedimiento para:

1. explotar una patente propia
2. proteger la libre competencia
3. experimentar con la invención
4. salvaguardar el interés público

|  |  |
| --- | --- |
| **ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia**  **Marcela Granados Romero** |
| **Los Jueces Promiscuos Municipales** no ostentan la competencia para resolver controversias jurídicas relacionadas con propiedad industrial.  Las normas procesales, han otorgado la competencia para conocer de asuntos tanto de propiedad intelectual como industrial, a la jurisdicción civil, en única y primera instancia en los Jueces Civiles del Circuito, a la Superintendencia de Industria y Comercio, y a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  **ARTÍCULO 19. COMPETENCIA DE LOS JUECES CIVILES DEL CIRCUITO EN ÚNICA**  **INSTANCIA.** Los jueces civiles del circuito conocen en única instancia:   1. De los procesos relativos a propiedad intelectual previstos en leyes especiales como de única instancia. (…)”   **ARTÍCULO 20. COMPETENCIA DE LOS JUECES CIVILES DEL CIRCUITO EN PRIMERA**  **INSTANCIA.** Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos:   1. De los relativos a propiedad intelectual que no estén atribuidos a la jurisdicción contencioso administrativa, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales que este código atribuye a las autoridades administrativas.   **Y en cuanto a la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, el C.G.P., la prevé en el artículo 24, numeral 3, literal a):**  **“(…) ARTÍCULO 24. EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.** Las  autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:  **3.** Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:  **a)** La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. (…)” | Esta pregunta es pertinente porque la presente pregunta exige que el funcionario judicial entienda que si bien el régimen de las nuevas creaciones otorga monopolios de explotación sobre las invenciones (sean estas productos o procedimientos), estos no son ilimitados y existen unos usos que están permitidos a toda la población como la experimentación, investigación, etc., sin que se requiera de una autorización del titular de la patente o del Estado. |
| No se alega la pertinencia de la pregunta respecto del conocimiento del juez, sino la falta de competencia de los Jueces Promiscuos Municipales para resolver ese tipo de controversias jurídicas. | |

1. **PREGUNTAS CON UNA TEMÁTICA NO CONTEMPLADA EN EL INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DEL EXAMÉN**

La universidad Nacional durante todo el trámite del presente concurso, publico varios instructivos con la temática sobre la cual se iba a preguntar en el examen, siendo el último instructivo el siguiente:

**Tabla 22.** Temas de la prueba de conocimientos específicos para Juez Promiscuo Municipal

**Temas Grupo**

Aspectos sustanciales en Derecho civil

**Derecho Civil** Aspectos procesales y probatorios en Derecho civil

Derecho comercial general Penal general y Teoría del delito 17

**Derecho Penal** Bienes jurídicos

Procesos penales o procedimiento

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTA 105 – Temática no incluida en el instructivo de presentación del examen**  El comprador de un apartamento nuevo interpone demanda ante un juzgado civil contra una constructora en la que exige la garantía establecida en el Estatuto del consumidor como consecuencia del incumplimiento en la entrega de unas ventanas insonorizadas y porque el inmueble presenta filtraciones y humedad constante que no han sido debidamente reparadas. También ha presentado problemas graves de humedades en las escaleras del conjunto. Pasados 10 meses de la entrega, se hizo una reclamación; el demandante pide la reparación de humedades, además de la instalación o compensación económica por las ventanas y reparación de las escaleras junto con la indemnización de los perjuicios causados por todas esas fallas:   1. viables porque la garantía cobija problemas de productos defectuosos en los cuales se puede pedir la indemnización de perjuicios. 2. inviables porque las normas de garantía del estatuto del consumidor no se aplican para inmuebles, sino las del código civil. 3. viables parcialmente porque la legitimación por activa no se cumple para las garantías relacionadas con bienes comunes. 4. inviables porque la garantía es una especie de vicio | |
| **ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia**  **Marcela Granados Romero** |
| Los supuestos de la pregunta 105 (Estatuto del consumidor) no encuadra ni tangencialmente en los temas específicos a evaluar a los Jueces Promiscuos Municipales; en ese orden de ideas, la pregunta 105 debe ser calificada como buena, por vulnerar expresamente las bases del concurso de méritos y en especial, el instructivo para la presentación de las pruebas.  Finalmente vale la pena precisar, que en un anterior instructivo publicado por la universidad, sí aparecía dicha temática como objeto de pregunta en el examen (estatuto del consumidor), sin embargo, en el último instructivo publicado, no aparece dicha temática. En razón a lo anterior, no se le puede calificar como errada una pregunta a un aspirante, respecto de un tema que no tenía por qué haberlo estudiado. La universidad Nacional al sorprender al aspirante con | Esta pregunta es pertinente porque las pretensiones sobre la garantía de la entrega de las ventanas y la relacionada con las humedades se pueden pedir por el propietario y se relacionan directamente con la calidad e idoneidad del inmueble, según los artículos 7 y siguientes de la ley 1480 de 2011, señalando el artículo 8 los términos de la garantía para inmuebles. Igualmente, se pueden pedir los perjuicios sobre estas, según el artículo 22 del decreto 735 de 2013. Pero en cambio la relacionada con la escalera, según el decreto 735 de 2013 artículo 14, no es procedente porque la legitimación para reclamar y demandar por bienes comunes la tiene el administrador de la propiedad horizontal no el dueño de la unidad privada. La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y, por ende, es una respuesta incorrecta porque no se trata de un producto defectuoso, definido  en el numeral 17 del artículo 5 de la ley 1480 de 2011 |

|  |  |
| --- | --- |
| reiterados cambios en el instructivo, cayó en el error de preguntar una temática ya finalmente sacó del instructivo final; no teniendo por qué el aspirante tener que soportar y llevar las consecuencias de dicho error.  Cabe resaltar que claramente la justificación de la Universidad a la respuesta dada como correcta, se fundamenta en la ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor) temática para calificación, retirada del último instructivo. | como “Aquel bien mueble o inmueble que, en razón de un error en el diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho”. Claramente la garantía del Estatuto del Consumidor tiene características y alcances diferentes a las relativas a responsabilidad por productos defectuosos: “A su turno, la responsabilidad del productor por producto defectuoso consiste en la obligación que tienen los miembros de la cadena de valor, específicamente los productores y/o proveedores, de responder a los consumidores por los daños ocasionados por los defectos de los bienes o servicios que comercializan. Es decir que esta especie de responsabilidad presupone un daño causado al consumidor o a sus bienes. Mientras que en materia de garantías se trata de garantizar al consumidor que el bien o servicio cuenta con la calidad e idoneidad mínima, la esperada normalmente o la ofrecida, en materia de responsabilidad por productos defectuosos nos encontramos frente a un régimen de responsabilidad especial en el cual se busca indemnizar al consumidor los perjuicios causados por un defecto del bien, el cuál puede ser de fabricación, diseño, información o empaque. Acota además la doctrina que el régimen de garantías se refiere a los daños propios del bien o intrínsecos, y la responsabilidad por productos defectuosos corresponde a los daños extrínsecos al bien, comúnmente denominados accidentes de consumo” (Stiglitz y Bru, 2009, p. 400 citado por Villalba, J. C., 2013). La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y, por ende, es una respuesta incorrecta porque la ley 1480 no excluye de la garantía a los bienes inmuebles (artículo 8 y 11), así como de conformidad con el artículo 13 el decreto 735 de 2013. La opción C es la respuesta correcta porque las pretensiones sobre la garantía de la entrega de las ventanas y la relacionada con las humedades se pueden pedir por el propietario y se relacionan directamente con la calidad e idoneidad del inmueble, según los artículos 7 y siguientes de la ley 1480 de 2011, señalando el artículo 8 los términos de la garantía para inmuebles. Igualmente, se pueden pedir los perjuicios sobre estas, según el artículo 22 del decreto 735 de 2013. Pero en cambio la relacionada con la escalera, según el decreto 735 de 2013 artículo 14, no es procedente porque la legitimación para reclamar y demandar por bienes comunes la tiene el administrador de la propiedad horizontal no el dueño de la unidad privada. La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y, por ende, es una respuesta incorrecta porque las pretensiones sobre la garantía de la entrega de las ventanas y la relacionada con las humedades se pueden pedir por el propietario y se relacionan directamente con la calidad e idoneidad del inmueble, según los artículos 7 y siguientes de la ley 1480 de 2011, señalando el artículo 8 los términos de la garantía para inmuebles. Igualmente, se pueden pedir los perjuicios sobre estas, según el artículo 22 del decreto 735 de 2013. Pero en cambio la relacionada con la escalera, según el decreto 735 de 2013 artículo 14, no es procedente porque la legitimación para reclamar y demandar por bienes comunes la tiene el administrador de la propiedad horizontal no el dueño de la unidad privada. |
|  | |

No se alega la pertinencia o no de la pregunta respecto las acciones y las normas a aplicar, sino el error de preguntar una temática la cual fue retirada y no estaba consagrada dentro del instructivo final, y con ello dentro de los temas que debía estudiar el aspirante.

1. **PREGUNTAS SUMAMENTE CONFUSAS Y MAL ELABORADAS QUE INDUCEN EN ERROR AL ASPIRANTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTA 126 – pregunta confusa y mal elaborada**  se pregunta qué debe hacer un fiscal, en el caso de que se capture a un conductor en un automóvil cargado de cocaína, teniendo en cuenta que el dueño del carro no tenía conocimiento de los hechos. La universidad da como clave válida de respuesta la opción “B” la cual dice que dicho automotor se debe devolver a la persona que acredite la propiedad.  Un conductor es capturado con nueve bolsas que contenían 11 kilos de cocaína transportándolos en un vehículo que no era de su propiedad. El dueño del carro amigo del capturado no tenía conocimiento de los hechos el fiscal a quien le corresponden las diligencias preliminares debe:   1. Devolver provisionalmente el vehículo a quien acredite su propiedad 2. devolver definitivamente el vehículo a quien acredite su propiedad 3. acudir ante un juez de garantías para que ordene la devolución del vehículo 4. acudir a un juez de garantías para que legalice la incautación del vehículo. | |
| **ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia Marcela**  **Granados Romero** |
| La pregunta va enfocada a determinar si un fiscal y previo a la medida material de incautación u ocupación, puede entregar un automotor, siempre que se acredite, entre otros, los derechos de un tercero de buena fe. En dicho caso y en atención a la acreditación de un tercero de buena fe (propietario), claro que el fiscal y en atención al artículo 83 del  C.G.P. puede entregar el automotor sin necesidad de librar la medida material para después legalizar ante juez de control de garantías. Sin embargo, dicha entrega solo procede si se acredita la existencia de un tercero de buena fe, ahí se encuentra el problema, toda vez que de la mención del enunciado en la pregunta “El dueño del carro, amigo del capturado, no tenía conocimiento” no se puede colegir que, en efecto, estaba acreditada la existencia de un tercero de buena fe. La sola mención en el enunciado de que el dueño del carro no tenía conocimiento no es suficiente para determinar que el fiscal debe devolver el vehículo sin necesidad de llevarlo ante el Juez de Control de Garantías. En ese orden de ideas y como a partir de la mención de que el propietario no tenía conocimiento, no se puede colegir que exista una acreditación de un tercero de buena fe, por lo tanto, el fiscal y ante la falta de acreditación no le quedaba otro camino que incautar y/o ocupar, para después legalizar ante el juez con función de control de garantías. Es claro el tema que la Universidad en esta pregunta quería evaluar, la no ocupación y/o incautación de un vehículo a partir de la acreditación de un tercero de buena fe, sin embargo, ha debido mencionar en el enunciado hechos que determinaran, que, en efecto, el propietario sí acreditó ser un tercero de buena fe (tarjeta de propiedad, contrato de arrendamiento, testigos, etc.), al no hacerlo y dejar solamente la mención de que el propietario no tenía conocimiento, no deja otro camino al fiscal que incautar u ocupar el vehículo para después legalizar dicho procedimiento ante el juez de control de garantías, conforme lo menciona la opción “D”. La opción “B” dada como válida, no puede estar desligada del enunciado, el enunciado me indica que no existe una acreditación de un tercero de buena fe. La mención de desconocimiento no es suficiente para que el evaluado colija que está acreditada la existencia de un tercero de buena fe. En la práctica, un fiscal que entregue un automotor con la sola | Esta pregunta es pertinente porque es importante que los jueces conozcan los alcances del comiso, las diferencias entre delitos culposos y dolosos; entre bienes del autor y de terceros, y también las competencias en materia de devolución de bienes que no han sido afectados por medidas cautelares, por jueces de control de garantías. La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y, por ende, es una respuesta incorrecta porque la devolución provisional opera para los delitos culposos, en los términos establecidos por el artículo 100 del Código Penal, de Igual medida, se aplicará en los delitos dolosos, cuando los bienes, que tengan libre comercio y pertenezcan al responsable penalmente, sean utilizados para la realización de la conducta punible, o provengan de su ejecución. La opción B es la respuesta correcta porque en los delitos dolosos sólo procede el comiso cuando el autor es propietario del vehículo, según lo establecido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia SP 11015-2016, radicación No. 47660: “En este caso, el comiso sólo es procedente respecto de los bienes y recursos del penalmente responsable, en el entendido que el artículo 82 de la Ley 906 de 2004, desarrolla lo consignado en el artículo 100 del Código Penal, y éste faculta la medida exclusivamente en lo que toca con «…bienes, que tengan libre comercio y pertenezcan al responsable penalmente, sean utilizados para la realización de la conducta punible, o provengan de su ejecución».” Como en este caso el automóvil es de libre comercio, y no le pertenece al indiciado, debe ser regresado a quien acredite su propiedad. La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y, por ende, es una respuesta incorrecta porque la intervención de juez de control de garantías, solo se hace necesaria en los eventos en que se ha decretado una medida cautelar sobre bienes susceptibles de comiso, según los establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-591 de 2014: “7. Cuando los bienes han sido objeto de medidas materiales de incautación u ocupación  con fines de comiso (artículo 88 C.P.P.), la actuación |

|  |  |
| --- | --- |
| mención y el argumento pobre de que el propietario no tenía conocimiento del hecho, sin entregar documentos que acrediten la existencia de un tercero de buena fe, con toda seguridad tendrá serios inconvenientes legales. | de autorizar la devolución a quien tenga derecho a recibirlos, trasciende la competencia del fiscal de proveer al aseguramiento de los elementos materiales de prueba, y puede afectar derechos fundamentales (acceso a la justicia, debido proceso, reparación integral), de las víctimas, de terceros con legítimas pretensiones sobre los bienes, o del propio imputado. Se trata de una decisión que involucra potestad dispositiva, comoquiera que implica definir quién tiene derecho a recibir los bienes del penalmente responsable, que provengan o sean producto directo o indirecto del delito, o que hubiesen sido utilizados en delitos dolosos como medio o instrumento para su ejecución.” En este caso no hay medidas cautelares posibles, dado que el proceso está en audiencias preliminares. La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y, por ende, es una respuesta incorrecta porque no es necesario acudir al juez de control de garantías para que legalice la incautación de un bien que no será sometido a comiso. Según lo proferido en Sentencias C-591 de 2014 y SU-036 2018 por la Corte Constitucional, quien fija la  responsabilidad en el fiscal para estos casos. |

# Preguntas con múltiple respuesta

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTA 63 – Múltiple respuesta**  En un proceso judicial una de las partes solicita al funcionario judicial que tenga como confesión lo dicho por la contraparte en la contestación de la demanda, en el entendido que se cumplen a cabalidad los requisitos para este medio de prueba. En esa situación el funcionario debe desestimar la declaración.   1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. 2. Recaiga sobre hechos respecto de los que algún cuerpo legal exija otro medio de prueba 3. Versen sobre hechos que producen consecuencias jurídicas favorables al confesante o adversa a la parte contraria. 4. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. | |
| **RESUMEN ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia Marcela**  **Granados Romero** |
| Todas las opciones posibles del artículo 191 que no fueran tergiversadas o cambiada su estructura, serían situaciones en las cuales procede la confesión y por ende no sería respuestas validas en la presente pregunta. Sin embargo, la opción “B” también se le cambio su estructura de la siguiente manera “Recaiga sobre hechos respecto de los que algún cuerpo legal exija otro medio de prueba” cuando el numeral 3 de la menciona norma expresa “Que Recaiga sobre hechos respecto de los que algún cuerpo legal NO exija otro medio de prueba”. En atención a lo anterior, la opción “B” de la pregunta también es válida, toda vez que si existen otros medios de prueba el juez debe desestimar dicha declaración. | Esta pregunta es pertinente porque el medio de prueba de confesión, se puede obtener de diversas formas en la demanda, la contestación y otros actos procesales, así que es fundamental para el administrador de justicia tener la suficiente claridad para determinar cuándo se está frente a la confesión. La valoración probatoria de los diferentes medios de prueba practicados en el curso de un proceso judicial es muy compleja, especialmente con aquellos medios indirectos como la confesión, por lo cual es necesario tener claridad para aplicarlo. La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una  respuesta incorrecta porque este es uno de los |
| Para que la opción “B” no fuera válida y descartarla de plano, ha debido transcribirse tal cual como se encuentra en el numeral 3 del artículo 191 del C.G.P., al haberse tergiversada o cambiado su estructura y omitir la palabra “NO” automáticamente la convierte en una opción válida de respuesta. Razón por la cual, las dos opciones de respuesta, tanto “C” como “B” son  opciones válidas. | requisitos de la CONFESIÓN establecido en el C.G.P., Art. 191 Núm. 1 La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque este es uno de los requisitos de la CONFESIÓN establecido en el C.G.P., Art. 191 Núm. 3. La opción C es la respuesta  correcta porque esta opción es diametralmente |
|  | opuesta a la consagrada en el Art. 191 Núm. 2 del |
|  | C.G.P., toda vez que la confesión debe reportarle |
|  | consecuencias adversas al confesante y no |
|  | favorables, tal como está en la opción. La opción D no |
|  | resuelve de manera adecuada el enunciado y por |
|  | ende es una respuesta incorrecta porque esa opción |

|  |  |
| --- | --- |
|  | encierra los requisitos de la CONFESIÓN establecido en el C.G.P., Art 191 Núm. 5, y por lo tanto debe estimarse como tal. |
| No se alega la pertinencia de la pregunta respecto del conocimiento del juez, sino la multiplicidad de respuestas. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTA 82 – Múltiple respuesta**  se estudia el caso de un psicólogo a quien solicitan información desde la entidad pública en relación con uno de sus clientes. Conforme a la solicitud, ésta se utilizará de manera anónima para ilustrar casos de acoso laboral. El psicólogo se niega, aduciendo la protección del secreto profesional. Desde una perspectiva constitucional, dicho secreto profesional se encuentra estructura principalmente por:   1. el carácter del solicitante. 2. el carácter de la información. 3. la relación personal. 4. la utilización del material. | |
| **RESUMEN ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia Marcela**  **Granados Romero** |
| el secreto profesional es la información que adquiere una persona en virtud de su desempeño en una profesión u oficio, y que debe ser conservada, conforme a la ética y la Ley. En corolario de lo anterior, el secreto profesional se desprende esencialmente de la información surtida o dada entre profesional y cliente. En ese orden de ideas, la Universidad se equivoca al pretender que la respuesta es la opción que habla de “relación personal”, toda vez que este es un concepto demasiado vago e impreciso que no logra trasmitir la noción del secreto profesional dado por la Corte Constitucional y su real significado. Si bien es cierto el secreto profesional de un psicólogo y su cliente, está ligado a una prestación de servicios personalísimos, aquello no es suficiente para afirmar que, en el caso propuesto, el secreto profesional se encuentra estructurado por la “relación personal”. De las opciones planteadas, la opción de respuesta correcta y que más se corresponde con la noción de secreto profesional sería la opción “B” que habla del carácter de la información.  La anterior postura, se refuerza al observar los artículos 10 literal f y 23 de la Ley 1090/06 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones, como quiera que en ningún momento señala que el secreto profesional psicólogo cliente se estructura principalmente por una relación personal, por el contrario, estas normas reiteran lo racional y lógico, esto es, la relación se estructura en razón de su actividad profesional | Esta pregunta es pertinente porque es importante que los aspirantes a jueces y magistrados estén familiarizados con las implicaciones del mandato constitucional que establece en su artículo 74 que “el secreto profesional es inviolable”; durante el ejercicio profesional de los aspirantes como jueces de tutela (jueces constitucionales), deberán tener este insumo claro. La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque en general, el carácter del solicitante no es relevante, y por ello es oponible a terceros (“De lo dicho se concluye que el secreto profesional ha sido consagrado en guarda de la relación del profesional con la persona que solicita y obtiene sus servicios, quien necesariamente debe hacerle conocer datos y elementos que de otra manera no le serían confiados por ella. Esa protección tiene efectos hacia el exterior de quienes han trabado la relación profesional, es decir, se trata de algo oponible a terceros” Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional). La Ley 1090 de 2010, que regula la profesión de Psicología, sólo contempla dos eventos en que el psicólogo puede revelar la información confiada: por autorización del paciente o cuando con la no revelación se cause un daño evidente al paciente o a un tercero (artículo 2, numeral 3). Dado que el material va a ser usado en la elaboración de una cartilla de índole genérica, el daño eventual ocasionado por la no revelación hacia un tercero no sería evidente. La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque Para que se active el secreto profesional que se establece entre el psicólogo y su cliente no es relevante la información que se pretende obligar a divulgar, sino la defensa de la relación personalísima que se establece entre el profesional y su cliente. El profesional está obligado, por ende, a proteger toda la información que le sea confiada, sin que le sea dable establecer diferenciaciones “El secreto profesional nace de una relación de confianza que surge entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos objeto de su relación: En el secreto profesional descansa parte muy importante de la confianza que debe surgir y permanecer entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos objeto de su relación. Mal se podría asegurar el éxito de la gestión confiada a aquél si los temores de quien requiere sus servicios le  impiden conocer en su integridad los pormenores de |

|  |  |
| --- | --- |
|  | la situación en que se ocupa… El secreto profesional tiene como fundamentos esenciales la tutela de la privacidad natural de la persona y la protección de la honra, el buen nombre y la buena fama del depositante del secreto: Se reserva para la privacidad o exclusividad, con un doble fin: primero, para no dejar indefensa a la persona, al despojarla de la introspección necesaria para vivir dignamente, con su privacidad natural. Y segundo, por la honra, buen nombre y buena fama del depositante del secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de reserva, lo cual indica que el conocimiento se guarda para algo específico, que debe ser utilizado en la confidencialidad y exclusividad propias del oficio. Se viola el secreto cuando se divulga (…).” Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional). La opción C es la respuesta correcta porque es el carácter personalísimo de la relación lo que determina la aplicación del secreto profesional. “La Corte Constitucional ha definido el secreto profesional como la información reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o actividad. En este sentido, el secreto profesional es un derecho – deber del profesional, pues de verse compelido a revelar lo que conoce perderá la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente de sustento. El secreto profesional nace de una relación de confianza que surge entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos objeto de su relación…” Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional. La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque Como puede colegirse de las anteriores explicaciones, la utilización eventual del material que puede obtenerse con la divulgación del secreto profesional no es lo que protege la disposición constitucional. |
| No se alega la pertinencia de la pregunta respecto del conocimiento del juez, sino la multiplicidad de respuestas. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTA 53 – Múltiple respuesta**  Las normas que condicionan las demás normas, tienen un contenido abstracto y abierto, y están formuladas como cláusulas generales que determinan criterios interpretativos del resto del ordenamiento, se denomina   1. directrices. 2. reglas. 3. principios. 4. valores. | |
| **ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia Marcela**  **Granados Romero** |
| Tanto los principios como los valores, tienen un contenido abstracto y abierto, sonformulados como clausulas generales y determinan criterios interpretativos del resto del ordenamiento; su diferencia radica en el grado de concreción o eficacia.El enunciado se equivoca al presentar una serie de características y pretender quede ellas se colija que solo se está hablando de valores, se equivoca por que las características enunciadas son comunes tanto para valores como para principios.La enunciación de unas características que no son reconocidas ni jurisprudencialmente ni doctrinalmente para diferenciar los valores de los  principios, indica una pregunta muy mal formulada; ha debido enunciarse una característica | Esta pregunta es pertinente porque para cualquier operador jurídico y, en especial, para los jueces y magistrados, es fundamental conocer los diferentes tipos de normas que integran un sistema jurídico con el objeto de poder interpretarlas y aplicarlas. La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque las directrices ordenan o permiten que se alcance un estado de cosas o fin general en la mayor medida de lo posible. La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque las reglas son normas que tienen un  supuesto de hecho formulado de forma cerrada y |

|  |  |
| --- | --- |
| fundamental que sí los diferencie, el grado de eficacia o concreción, por ejemplo; al no hacerlo induce al aspirante a un error, toda vez que no encuentra un punto de referencia claro para inclinarse ya sea por valores o principios.  La jurisprudencia utilizada para la presente pregunta (Sentencia C-1287/01), evidentemente habla de que existe coincidencia en la doctrina a la hora de considerar una serie de características que definen los valores (condicionan demás normas, abstractas, abiertas, formuladas como clausulasgenerales). Sin embargo, dicho apartado se debe analizar en conjunto con todo el párrafo, toda vez que y conforme la parte subrayada inicialmente, la Corte Constitucional también es clara en dicho párrafo al señalar que, para otros doctrinantes, la única diferencia entre valores y principios es su grado de eficacia directa. En corolario de lo anterior y analizando el párrafo total en su conjunto, se equivoca la Universidad al pretender que una serie de características enunciadas únicamente pertenezcan a los valores, cuando el mismo párrafo habla de una similitud entre valores y principios, tan solo diferenciados por su grado de eficacia directa. Yerra la Universidad entonces al pretender que la enunciación de una serie de características afines tanto a principios como a valores, sirve como criterio de diferenciación para estos. Del párrafo citado y el cual se utiliza para plasmar la pregunta, se colige que existe una coincidencia de la doctrina para definir los valores,más no que dichas características sirvan o constituyan la diferenciación respecto de los principios.  Es más, la pregunta es equivocada al pretender sacar una conclusión a partir de una parte del párrafo, aislada y sacada de contexto. Precisamente la sentencia citada y apartir de la cual se construye la pregunta, trata la diferenciación entre principios y valores, y seguidamente habla de aquello que únicamente los diferencia (concreción y eficacia) más no utiliza una serie de características, afines a los valores, para diferenciarlos; sencillamente porque aquellas características también identifican a losprincipios. Si la diferencia entre principios y valores se pudiera lograr simplemente a través de la definición dada para los valores en el enunciado, no habría razón alguna para que se debatirá de manera extensa dicha temática en la presente jurisprudenciacitada y en la filosofía jurídica. | ordenan una consecuencia jurídica definitiva, es decir, cuando se cumplen determinadas condiciones, ordenan, prohíben o permiten algo definitivamente. La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque los principios también son normas que condicionan las demás normas, pero con mayor grado de concreción y, por lo tanto, de aplicabilidad concreta, alcanzando por sí mismos proyección normativa. La opción D es la respuesta correcta porque tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional han definido los valores de la forma expuesta en el enunciado. |
| No se alega la pertinencia de la pregunta respecto del conocimiento del juez, sino la multiplicidad de respuestas. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTA 84 – Múltiple respuesta**  Conforme a la estructura constitucional la administración de Justicia es   1. un servicio público. 2. un servicio esencial. 3. una prestación pública. 4. una función pública. | |
| **RESUMEN ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia Marcela**  **Granados Romero** |
| La pregunta considerando las opciones de respuesta es ambigua toda vez que, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en su artículo 1º estipula que la administración de justicia es parte de la función pública. el artículo 125 de la Ley en cita también clasifica la administración de justicia como un servicio público esencial. | Esta pregunta es pertinente porque es necesario que un servidor de la justicia conozca adecuadamente la estructura de la Rama. La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque La Constitución establece diferencias entre servicio público y función pública, y establece que la administración de justicia  corresponde a la segunda. Conforme al Consejo de |

|  |  |
| --- | --- |
| Las preguntas de la universidad han debido basarse sobre temáticas absolutamente claras y que no admiten discusión, por el contrario, y si se encuentra jurisprudencia y normatividad que conciben a la administración de justicia como servicio público, no es posible que dicha pregunta sea calificada de manera errónea por la universidad. El aspirante durante la etapa previa a la presentación de examen, como es mi caso, estudió jurisprudencia que claramente concibe a la administración de justicia como servicio público, con lo cual, y si no existe un criterio único sobre el tema, dicha pregunta está claramente mal formulada y dicha anomalía no tiene por que sufrirla el aspirante. Ahora bien, al hablar el enunciado y condicionar la respuesta a partir de la “estructura constitucional” termina por volverla sumamente confusa, toda vez que por estructura también se entiende tanto los artículos que la componen como la reglamentación derivada de ella (ley 270 de 1996) y la jurisprudencia de la corte constitucional; toda vez que por estructura no debe entenderse solamente en el análisis de las partes o elementos en que se descompone, sino también en el modo como se articulan entre sí, tanto desde el punto de vista lógico- formal como desde las conexiones de sentido.  De tal forma, tanto la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de Justicia como la Corte Constitución máxima autoridad establece que la administración de justicia es un servicio público esencial y a la vez es función pública, por ello ambas opciones de respuesta son válidas. Así observándose que mi respuesta fue que la Administración de Justicia es un servicio público, mi respuesta debe considerase válida. | Estado “El servicio público es una actividad que realiza la Administración, en forma directa o delegada, con el objeto de satisfacer las necesidades de los administrados, esto es: el interés general”. La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque no aplica a la materia de justicia. La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque no está contemplado en la Constitución. La opción D es la respuesta correcta porque así lo dispone el artículo 228 de la Constitución Nacional. Conforme al Consejo de Estado “La función pública es toda actividad ejercida por los órganos del estado para la realización de sus fines”. |
| No se alega la pertinencia de la pregunta respecto del conocimiento del juez, sino la multiplicidad de respuestas. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTA 28 – Respuesta errada**  En una región de un país, el gerente de un proyecto afirmó que, si aumentaba el presupuesto de un proyecto, entonces contratarían más trabajadores y si contrataban más trabajadores, entonces podría disminuir la tasa de desempleo, pero no contrataron más trabajadores. La conclusión es:  A). No aumentó el presupuesto, pero podría disminuir la tasa de desempleo B). Pudo aumentar el presupuesto, pero no disminuyó la tasa de desempleo C). No aumentó el presupuesto y no disminuyó la tasa de desempleo  D). Aumentó el presupuesto y disminuyó la tasa de desempleo | |
| **RESUMEN ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia Marcela**  **Granados Romero** |
| La opción A es incorrecta porque el enunciado presenta un doble condicional. En ese sentido, si se afirma que no hubo contrataciones, se debe a la condición de que no aumentó el presupuesto y esto, como consecuencia, repercute en la imposibilidad de que disminuya la tasa de desempleo. La opción B es incorrecta porque si el enunciado afirma que no hubo contrataciones, entonces se puede interpretar que no aumentó el presupuesto. La opción D igualmente es incorrecta porque las contrataciones dependen directamente del aumento en el presupuesto, por lo tanto, si las contrataciones no se dieron lugar, se puede interpretar que tampoco hubo aumento en el presupuesto ni una disminución en la tasa de desempleo. La única opción que hace sentido es la C, esto porque si no disminuyó la tasa de desempleo, algo que sí se relaciona directamente con la falta de contratación y con la falta de aumento en el presupuesto.  La información suministrada en el texto adquiere una estructura silogística, donde no caben criterios de posibilidad o sentido, que se le atribuyan a la respuesta por fuera del mismo texto. Aquí, la | La opción A es la respuesta correcta porque si se considera como verdadera la afirmación “si se aumenta el presupuesto del proyecto, se puede contratar más personas”, pero se niega que se contraten más personas, entonces se puede concluir que no se aumenta el presupuesto en virtud de la relación propuesta. Sin embargo, si se niega que se contratan más personas, no se puede concluir que la tasa de desempleo no vaya a disminuir. Esta disminución puede darse por factores ajenos a la contratación en el proyecto. Por tanto, si no se contratan más personas, se puede afirmar que no se aumenta el presupuesto, pero podría disminuir la tasa de desempleo. La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque es suficiente con que se aumente el presupuesto para que se contraten más personas. Por tanto, si no se contratan más personas, la única conclusión a la que se puede llegar es que el presupuesto no aumenta. De manera análoga, es  suficiente con que se contraten más personas para |

|  |  |
| --- | --- |
| inconsistencia deviene del verbo “PUDO”, que expresa la presencia de alternativas por fuera de la información del enunciado para responder satisfactoriamente a la pregunta. En otras palabras, la pregunta desplaza la posibilidad de responder correctamente a un criterio exógeno al enunciado, lo que claramente es injusto e inconsistente. | que la tasa de desempleo disminuya. Sin embargo, aún si no se contratan más personas, la tasa de desempleo puede mantenerse constante. La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque si bien es cierto que solo se puede concluir que no se aumenta el presupuesto al no contratar más personas, la segunda afirmación es falsa. Es suficiente con que se contraten más personas para que la tasa de desempleo disminuya. Sin embargo, aún si no se contratan más personas, la tasa de desempleo puede mantenerse constante. La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque no se está teniendo en cuenta que se está negando la contratación de más personas (y por lo tanto, no se puede concluir que el presupuesto aumenta), por lo que afirmar que si se contratan más personas disminuye la tasa de desempleo, es falso. |
| No se analiza de fondo el error de la pregunta planteado. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTA 23 – Respuesta errada**  En una investigación arqueológica se quiere determinar si unos restos encontrados son de un grupo nómada o sedentario. Se sabe que si el grupo era nómada las herramientas de caza que se encuentren deben ser de tamaño pequeño y poco peso, pues facilitaba su transporte. Se encontraron herramientas de caza de tamaño pequeño y poco peso por lo que el arqueólogo P concluye que los resultados pertenecen con toda certeza a un grupo nómada. Por otra parte, no se encontraron estructuras de resguardo por lo que el arqueólogo Q concluyó que no es posible determinar si el grupo de esa nómada o sedentario. De lo anterior se puede concluir que:   1. La argumentación del arqueólogo P es correcta y la del arqueólogo Q incorrecta. 2. Tanto la argumentación del arqueólogo P y Q es correcta. 3. La argumentación del arqueólogo P es incorrecta y la de Q es correcta. 4. Tanto la argumentación del arqueólogo P y Q es incorrecta. | |
| **RESUMEN ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia Marcela**  **Granados Romero** |
| Las opciones B y C no son acertadas porque la argumentación ofrecida por el arqueólogo Q es incorrecta, puesto que se asegura como condicionante de una civilización sedentaria la existencia o presencia de estructuras de resguardo.  Por otro lado, el texto afirma literalmente: "Se sabe que si el grupo era nómada las herramientas de caza que se encuentren deben ser de tamaño pequeño y poco peso”. En atención a este apartado, se evidencia una ausencia de información en el texto que no permite establecer una opción correcta entre A y D, en tanto el verbo “deben”, en este sentido, representa una palabra con valor adversativo, esto es, que puede significar tanto una cosa como su contrario.  Así, pues, deben puede significar tanto la posibilidad de que la civilización sea o no nómada, dadas las herramientas de caza encontradas, como la condición necesaria de estos hallazgos para que la sociedad sea incuestionablemente nómada.  En ese sentido, los fundamentos textuales que ofrece el enunciado permitirían negar o afirmar conjuntamente dos opciones de respuesta, lo que claramente constituye una inconsistencia en la estructura y enunciación de la pregunta, entendiendo que una de ellas corresponde a la opción correcta. | La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque si bien la argumentación de Q sí es incorrecta, para la argumentación de P, si las herramientas de caza que se encuentran son de tamaño pequeño y poco peso, no se puede concluir que el grupo sea nómada, ya que pueden pertenecer a otro grupo, pues no se garantiza que las herramientas pequeñas y de poco peso sean de uso exclusivo de este grupo, de acuerdo con la información del contexto. La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque para la argumentación de P, si las herramientas de caza que se encuentran son de tamaño pequeño y poco peso, no se puede concluir con total certeza que el grupo sea nómada y, para la argumentación de Q, si no se encontraron estructuras de resguardo, se puede concluir correctamente que el grupo no es sedentario; como los restos son, o de un grupo nómada o de uno sedentario, pero no son de un grupo sedentario, entonces son de un grupo nómada, por lo cual SÍ es posible determinar si el grupo era nómada o sedentario. La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque si bien la argumentación de P SÍ es incorrecta, para la argumentación de Q se debe considerar que, si no se encontraron estructuras de resguardo, se puede concluir correctamente que el  grupo no es sedentario; como los restos son o de un |

|  |  |
| --- | --- |
|  | grupo nómada o de uno sedentario, pero no son de un grupo sedentario, entonces son de un grupo nómada, por lo cual SÍ es posible determinar si el grupo era nómada o sedentario. La opción D es la respuesta correcta porque de los resultados de la investigación se puede concluir que el grupo era nómada; sin embargo, el argumento de P es incorrecto porque esto se puede sustentar por el hecho de no haber encontrado estructuras de resguardo, más no por haber encontrado herramientas de caza de tamaño pequeño y poco peso, lo cual es una condición necesaria pero no suficiente para caracterizar a un grupo como nómada, pues no se garantiza que las herramientas pequeñas y de poco peso sean de uso  exclusivo de este grupo. |
| No se analiza de fondo el error de la pregunta planteado. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PREGUNTA 06 – Respuesta errada**  Se diría que combatir la posverdad exige en todos nosotros buenas dosis de pensamiento crítico bien entendido, que también podría beneficiarse de una voluntad decidida para superar cierta apatía generalizada. No se trata empero de responder a la causa de la posverdad con una causa de la contra posverdad, si no que cada uno de nosotros, muto proprio, opte por respetar la verdad; por hacerlo en necesaria sintonía con el compromiso moral de los seres humanos, al margen de su alineación política y lejos de cualquier alineación. De acuerdo con el texto, el pensamiento crítico “bien entendido” implicaría.   1. Perseguir el conocimiento de los hechos para guiar a la sociedad por una mejor senda política. 2. Denunciar situaciones en que un político publica información de dudosa veracidad. 3. C. Rechazar el compromiso con una postura política, en aras de perseguir la verdad. 4. D. Cultivar el deseo de conocer los hechos, sin que implique superar una apatía generalizada**.** | |
| **RESUMEN ARGUMENTO DEL RECURSO** | **RESPUESTA DE LA DOCTORA Claudia Marcela**  **Granados Romero** |
| La opción A es falsa dada la ambigüedad con la cual termina el enunciado, en tanto, hablar de "una mejor senda política" no es una expresión lo suficientemente clara como para garantizar la naturaleza del pensamiento crítico bien entendido, además, la persecución del conocimiento de los hechos, como se expresa en esta opción, no plantea una necesaria correspondencia con la idea de voluntad decidida que se expresa en el texto como una condición del pensamiento crítico bien entendido.  Por su parte, la opción B, si bien podría ser un enunciado que se desprenda de la consideración de la pregunta, no constituiría un elemento necesario o suficiente para garantizar dicho pensamiento crítico bien entendido, pues la acción de denuncia no es un condicionante de este, en tanto expresa una vía de hecho que no representa una necesidad latente en la concreción de un pensamiento crítico bien entendido que tiene que ver más una voluntad decidida al margen de cualquier alineación política o personal.  La opción D presenta una inconsistencia significativa, toda vez que, la pregunta hace uso del término "implica", (hacer que alguien se vea enredado o comprometido en un asunto), y en esta opción se afirma tácitamente que el ejercicio del pensamiento crítico NO IMPLICA SUPERAR UNA APATÍA GENERALIZADA, lo cual, claramente, se aleja de lo que se expresa en el inicio del texto. Es decir, el pensamiento crítico bien entendido, sí implica superar cierta apatía generalizada, lo cual se puede interpretar como una invitación al reconocimiento de distintas posturas, más allá de la defensa de una propia.  En este caso, la opción C parece más acertada. Si el | La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque el conocimiento de los hechos debe estar desligado de cualquier alineación política y, en este caso, tener el propósito de guiar la sociedad por una mejor senda política pre supondría una alineación política que indique cuál es la mejor senda. La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque el autor llama la atención sobre el hecho de que el pensamiento crítico no se trata de responder a la causa de la posverdad con una causa de la contra posverdad. Según el texto, al hacer alusión a “cada uno de nosotros, motu proprio, opte por respetar la verdad”, con la denuncia establecida en la opción de respuesta se iría en contravía con la forma de actuar propuesta por el autor. La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque no necesariamente se debe rechazar la adopción de una postura política; lo que sí se requiere es que alinearse con esa postura no influya en la búsqueda de la verdad. La opción D es la respuesta correcta porque el inicio del texto se refiere a la voluntad de superar la apatía como un elemento que puede añadirse al pensamiento crítico, lo cual indica que el pensamiento crítico y la ausencia de apatía son aspectos separados, y que se puede tener una sin tener la otra. |

|  |  |
| --- | --- |
| pensamiento crítico bien entendido implica superar cierta apatía generalizada, se entiende que rechazar el compromiso con una postura política particular, en aras de perseguir la verdad, sería un elemento fundamental; una condición para establecer un escenario donde impere el pensamiento crítico bien entendido.  En atención a lo anterior y que ha quedado más que claro el planteamiento de la Universidad y que dicha pregunta admite una doble respuesta, solicito que esta me sea calificada como acertada, dado que se respondió la opción “C”. |  |
| No se analiza de fondo el error de la pregunta planteado. | |

**PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA**

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al enunciar que en casos como en el presente y en cual se controvierte una resolución que publica una calificación en prueba de conocimientos, la tutela es el mecanismo idóneo y procedente. Lo anterior en atención a que no nos encontramos ante un acto administrativo como tal (lista de elegibles) este es tan solo un acto de trámite y/o preparatorio, el cual no tiene control en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

# PRETENSION

Se orden al Consejo Superior de la Judicatura-Universidad Nacional, corregir mi calificación final, para lo cual deberá tener como respuestas acertadas, las de aquellas preguntas en que aquí se han demostrado claramente que existieron errores (múltiple respuesta, respuesta errada, no competencia y temática no contemplada dentro del instructivo); y a la vez se inste a la Unidad Administrativa de carrera Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, para que en próximas oportunidades proceda a resolver los recurso de impugnación, de manera detallada, sería y congruente con los recursos de reposición presentados.

# MEDIDA PROVISIONAL

Hasta tanto no resuelva de forma definitiva la petición de amparo que se demanda en el presente tramite, se solicita que se ordene a la unidad de carrera del consejo superior de la judicatura que suspenda el trámite de la presente convocatoria, incluyendo dentro de esta la notificación de la resolución mediante la cual se publica la relación de admitidos de la convocatoria 27 que se tiene programada para el próximo 8 de febrero de 2023.

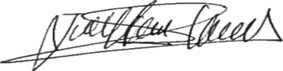
# PRUEBAS

* Resoluciones y resultados de prueba de conocimientos
* recurso de reposición resultados ultima prueba.pdf
* Resolución CJR23-0042 - Resuelve recurso de reposición
* Respuesta objeciones a preguntas
* Resolución acepta errores en anterior examen y ordena repetir prueba
* cronograma Convocatoria 27
* Instructivo de presentación prueba de conocimientos
* Cronograma de concurso

# NOTIFICACIONES

Las del accionante en el correo electrónico: [jeisonh@unicauca.edu.co](mailto:jeisonh@unicauca.edu.co ) y/o en el celular: 323 334 8182

ATT,



# JEISON H. GÓMEZ CRUZ

C.C. 1.058.966.190 De Bolívar-Cauca